ACUERDO n.º 5/2025. En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los 8 días de agosto de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ), integrada por el Dr. Alfredo Alejandro Elosu Larumbe y la Dra. María Soledad Gennari, se reúne en acuerdo; con la intervención del Dr. Andrés Claudio Triemstra, Secretario de la Secretaría Penal. A fin de resolver la impugnación extraordinaria presentada por el Ministerio Público Fiscal (en lo sucesivo, MPF), en el caso: **"S.S.A. S/ABUSO SEXUAL"** (Legajo MPFZA n.º 48147/2024).

ANTECEDENTES:

I. En la audiencia de control de la acusación, la jueza de Garantías:

1) no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (en adelante, SJP) que la defensa había peticionado;

2) admitió la acusación y elevó el caso a juicio, por el hecho atribuido a S.S., como presuntamente cometido el 26/11/2021, en perjuicio de A. (nacida el 3/10/2006). El accionar imputado fue calificado en forma provisoria como abuso sexual con acceso carnal, en grado de tentativa (cfr. en Cícero, video de la audiencia del 26/2/2025).

La defensa pública impugnó el rechazo de la SJP. El Tribunal de Impugnación revocó la resolución cuestionada y reenvió el caso para que, ante otro juez, se discutan las condiciones correspondientes al beneficio (cfr. en Cícero, video de la audiencia del 19/3/2025 y en Dextra, el acta respectiva).

II. Recurso

El fiscal del caso Marcelo Jofré presentó una impugnación extraordinaria contra el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. Encauzó su pretensión por el artículo 248 inciso 2 del Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén (en adelante, CPPN).

Adujo que la decisión cuestionada resulta arbitraria, al carecer de fundamentación suficiente; como así también, por una interpretación y aplicación legal erróneas, al no reconocer la opinión de la mujer presunta víctima de violencia de género. Que lo resuelto vulnera el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, los compromisos convencionales asumidos por el Estado y ocasiona una revictimización a la presunta víctima (artículos 5, 18, 31, 75 inciso 22 y 120 de la Constitución Nacional [CN]; 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer [CEDAW]; 1, 2.b y 7.b y f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer [Convención de Belém do Pará]; 5 inciso k de la ley n.º 27372; 27 bis, 71 y 76 bis 4.º párrafo del Código Penal [CP]; 61 inciso 7, 99 y 108 del CPPN; 1 de la ley n.º 2893).

Argumentó sobre la admisibilidad de la impugnación intentada; dijo que se trata de una cuestión federal suficiente que habilitaría la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario federal. Criticó que el pronunciamiento impugnado no cumple con las exigencias de motivación emanadas del derecho de defensa en juicio, por

lo que los tribunales tienen el deber de expedirse sobre la cuestión. En ese sentido, señaló que tal planteo no puede llegar al Máximo Tribunal Nacional sin haber sido previamente resuelto por las instancias ordinarias y extraordinarias provinciales.

También, manifestó que lo resuelto ocasiona un gravamen evidente y de imposible reparación ulterior a la presunta víctima. Esto, al haberse concedido la SJP en forma arbitraria, frente a la oposición fundada de ese MPF; ya que si el acusado cumple las condiciones que se le impongan se produciría la extinción de la acción penal.

Describió el hecho atribuido al acusado, como presuntamente cometido contra A. (en ese entonces, de 15 años de edad) y al que calificó como tentativa de abuso sexual con acceso carnal (cfr. recurso, p. 5).

Aclaró que ese Ministerio se opuso a la SJP solicitada por la defensa, en la audiencia de control de la acusación. Que tal rechazo estuvo fundado en la voluntad de la presunta víctima, que quiere un juicio. Que ante la jueza de Garantías, expuso que la joven A. solo prestaba la conformidad para un juicio abreviado dado que permitiría que el imputado se declare culpable y que esa joven quería hablar ante la jueza, ser escuchada. Manifestó que la presunta víctima no quiere una suspensión del juicio a prueba y que tiene derecho a un juicio justo y a ser escuchada, según la Convención de Belém do Pará.

Que la jueza de Garantías denegó la SJP y sostuvo que la oposición fiscal está fundada. Que entre

otras razones, expuso que el artículo 61 punto 7 del CPPN establece que ante cada decisión que extinga o suspenda la acción debe escucharse a la víctima. Que el fiscal se reunió con la presunta víctima y la razón por la que acepta un acuerdo es la declaración de responsabilidad. Consideró que tiene que valorar las convenciones internacionales, las obligaciones no solo con el imputado sino con la víctima. Que la Convención de Belém do Pará no solo obliga a escuchar la palabra de la víctima, sino que establece una obligación de perseguir, erradicar y sancionar las violencias hacia las mujeres. Que la SJP, al finalizar el camino implica un sobreseimiento; que es a lo que se está oponiendo la fiscalía. También, consideró que las manifestaciones de la presunta víctima tienen que ser analizadas atendiendo al bien jurídico afectado por el delito atribuido (daño en el propio cuerpo, en la propia psiquis).

Expuso como agravios:

a) Arbitrariedad de sentencia.

Alegó que la decisión impugnada resulta arbitraria, como así también, que vulnera el derecho al debido proceso y los compromisos convencionales asumidos por el Estado Argentino.

Que no se tuvo en cuenta que el consentimiento del MPF se encuentra exigido en forma expresa para la procedencia de la SJP (artículos 76 bis 4.º párrafo del CP y 108 del CPPN). Es decir, que se prescindió de uno de los requisitos legales para conceder el beneficio; ya que la oposición fiscal obstaculiza la posibilidad de hacer lugar a la SJP. Sumado a que se

resolvió en contra de lo manifestado por la presunta víctima, en un caso en el que se investiga un acto de violencia contra una mujer.

Señaló que el artículo 108 del CPPN se encuentra en el capítulo III "Reglas de disponibilidad de la acción". Y que al MPF le compete el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, siendo la SJP un modo de disponer de dicha acción.

Destacó que los criterios de política criminal dirigidos a mantener la persecución penal deben quedar de manera exclusiva en cabeza de ese Ministerio y no de quien ejerce la jurisdicción (como el Tribunal de Impugnación). Que según la resolución n.º 13/13 del MPF, constituye un deber de los fiscales oponerse a la SJP en los casos de género; salvo que se cuente con el consentimiento de la víctima. Situación que no se da en el presente caso.

Que la jueza de Garantías puede rechazar la suspensión del juicio a prueba cuando exista oposición motivada y razonada de ese Ministerio; que es lo que aconteció en este legajo.

Recordó que el hecho investigado configura un acto de violencia contra una mujer. Y afirmó que al momento de aplicar las normas del CPPN debe agotarse la interpretación conforme a la normativa de jerarquía constitucional y supralegal que rige la cuestión, a fin de cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado (artículos 18, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 5 de la CEDAW; 1, 2.b y 7.b y f de la Convención de Belém do Pará).

b) Vulneración del principio de legalidad.

Manifestó que el Tribunal de Impugnación no tiene habilitada su jurisdicción para sustituir el criterio del MPF sobre el no consentimiento -junto a la presunta víctima- del otorgamiento de la SJP. Tampoco para decidir si las reglas de conducta propuestas por la defensa son más beneficiosas para la presunta víctima (artículos 5 y 120 de la CN; 5 inciso k de la ley n.º 27372; 27 bis, 71 y 76 bis 4.º párrafo del CP; 61 inciso 7 y 99 del CPPN y 1 de la ley 2893).

Entendió que el criterio fiscal está sujeto al control de legalidad como parte de la función jurisdiccional; pero que ese análisis no implica una confusión de competencias. Que el control mencionado consiste en determinar si el MPF actuó dentro del margen de atribuciones legales (evaluar si la oposición ha sido motivada y congruente con los estándares que regulan la materia y las obligaciones internacionales asumidas).

Que el órgano revisor solo dijo que la "conformidad" fiscal no estaba motivada y que las condiciones ofrecidas por la defensa son más beneficiosas para la víctima. No valoró que el hecho imputado constituye un acto de violencia contra una mujer y no tuvo en cuenta la voluntad de la presunta víctima. Es decir, no efectuó un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad.

Que el Tribunal de Impugnación no tuvo en cuenta que la SJP debe ser considerada en relación con las obligaciones asumidas, respecto a una adecuada respuesta frente a sucesos como el hecho denunciado y que

la víctima tiene el derecho de ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. Que si bien no se dice que esa opinión debe ser vinculante, la misma debe ser valorada con principios convencionales.

c) Doctrina sentada por este TSJ.

Aludió a la interlocutoria n.º 67/2017 de esta Sala Penal. Dijo que en la misma se confirmó el rechazo de la procedencia de la SJP, en un caso que podría encuadrarse como constitutivo de violencia contra la mujer (por las características particulares del caso, la política de persecución penal y las obligaciones internacionales asumidas).

Citó la jurisprudencia que estimó aplicable; a modo de ejemplo, el caso "Góngora" de la CSJN.

Hizo reserva del caso federal.

Solicitó que se revoque el pronunciamiento impugnado y quede firme la resolución de la jueza de Garantías. En su defecto, que se disponga un reenvío para el dictado de una nueva decisión.

III. Audiencia ante la Sala Penal

Las partes alegaron en torno al recurso presentado y la decisión cuestionada en la audiencia llevada a cabo el día 1/7/2025; por aplicación de lo dispuesto en los artículos 245 y 249 del CPPN (cfr. el video de la audiencia mencionada y en Dextra, el acta respectiva).

Estuvieron presentes en ese acto: por el Ministerio Fiscal, el fiscal jefe Mauricio Zabala y el fiscal del caso Marcelo Jofré; y por la contraparte, el

defensor público Lucas Guiñez y el imputado S.A.S. (ambos por plataforma digital).

En dicha audiencia, primero, los Dres. Zabala y Jofré alegaron en forma sucesiva, a favor de la admisibilidad del recurso y sobre la cuestión de fondo, en términos similares a lo expuesto en el escrito impugnativo (cfr. minutos 01:47/23:03 y 23:04/25:42, respectivamente).

Entre otras manifestaciones, esa parte adujo que la decisión cuestionada resulta arbitraria por fundamentación insuficiente o aparente y que vulnera el debido proceso. Criticó que el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación no se extiende sobre los fundamentos que dio la jueza de Garantías para denegar la SJP. Que el órgano revisor solamente señala que la oposición de ese Ministerio no es fundada porque no se puede basar solo en los dichos de la presunta víctima y después se dedica a las consecuencias de la SJP. Solicitó que se revoque el pronunciamiento impugnado y se confirme la resolución de la jueza de Garantías, para que el caso llegue a un juicio, en el que la presunta víctima sea escuchada.

Con posterioridad, el Dr. Guiñez alegó a favor de su postura (cfr. 26:08/39:24).

Expresó que el recurso debía ser declarado inadmisibile, porque no cumple los requisitos legales. Que el MPF había utilizado la vía del artículo 248 del CPPN, pero no fundamentó en esos términos en la audiencia; no habló de una posible cuestión federal sino solo de arbitrariedad.

Sobre la cuestión de fondo, mencionó que la jueza de Garantías no concedió la SJP al acusado, dada la oposición de la fiscalía y al considerar que la opinión de la víctima en este tipo de delitos era vinculante.

Manifestó que la decisión del Tribunal de Impugnación tiene motivación suficiente, no es arbitraria; no se basa en el solo capricho de conceder una SJP. Que está fundamentada en el principio de legalidad, dado que se cumplen todos los requisitos legales, según los artículos 76 bis -del CP- y 108 del CPPN.

Refirió que se discutió en las audiencias que el acusado no tiene antecedentes penales, no es funcionario público en ejercicio de sus funciones y la pretensión punitiva del MPF era inferior a 3 años. Dijo que había alegado que a partir de los hechos relatados por el MPF podría aplicarse una calificación legal menor (abuso sexual simple). Que lo central es la pretensión punitiva fiscal y el Tribunal de Impugnación tuvo en cuenta esa circunstancia; que para el hipotético caso que el imputado sea condenado, sería de ejecución condicional.

Afirmó que el órgano revisor había analizado los requisitos del artículo 108 del CPPN; que establece que un juez solo puede denegar la SJP si la oposición de la fiscalía es razonada o está fundada. Que ese tribunal sostuvo que la oposición del MPF era irrazonable, totalmente injustificada, porque solo hizo un análisis en base a la oposición de la presunta víctima. Que si bien la víctima tiene derecho a ser escuchada y a que su

opinión sea tenida en cuenta en todo el proceso penal, no solo en el juicio; la presunta víctima había sido escuchada por los jueces a través del MPF, pero no es vinculante ni para el fiscal ni para los jueces.

Agregó que ese órgano hizo saber que, en este caso, las reglas de conducta iban a ser más gravosas que una posible condena de ejecución condicional. Porque la defensa ofreció el plazo máximo posible, 3 años; una prohibición de acercamiento a la denunciante y un tratamiento psicológico. También, que analizó que ese tratamiento al ser voluntario consistía en tratar patrones sobre violencia de género y demás. Que justamente la Convención de Belém do Pará busca erradicar tales conductas; por lo que las reglas mencionadas resultan adecuadas y justifican los fines de la Convención. Y que sobre la reparación económica que no fue aceptada, sostuvo que no es un requisito legal, que la presunta víctima puede aceptarla o no.

Afirmó que, en este caso, se han cumplido los requisitos legales; solo está en juego la discusión si la oposición de la fiscalía es razonable o no, si solo debe basarse en la oposición de la víctima.

Sobre el fallo "Góngora", dijo que en ese caso no se habían fijado las reglas de conductas. Y que en este legajo, sí y que van con los fines que establece la Convención de Belém do Pará.

Manifestó que la SJP no sería un mensaje de impunidad, como la fiscalía había alegado -que si la persona cumple con todos los requisitos es sobreseído-. Estimó que se trata de una salida alternativa regulada y,

que en este caso, no se atenta contra la Convención de Belém do Pará.

Que el Estado no incurriría en responsabilidad internacional, porque con la SJP está brindando una respuesta jurisdiccional. Que un juez de ejecución controla al acusado; en este caso, por 3 años y éste tiene que cumplir con cada una de las reglas de conducta, que hay una conciencia de que está sometido a proceso judicial. Y que la presunta víctima fue escuchada; por más que el órgano revisor haya decidido en contra de lo que ella dijo. Que la negativa de la misma no es un impedimento para la concesión de la SJP; sino se estaría agregando otro requisito y se iría en contra del principio de legalidad.

Peticionó que la impugnación extraordinaria del MPF sea declarada inadmisibile. Para el supuesto contrario, solicitó que se rechace y se confirme la decisión del Tribunal de Impugnación.

IV. Al finalizar la audiencia, se procedió a la deliberación para emitir el pronunciamiento correspondiente. Luego, llevado a cabo el sorteo pertinente, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Dr. Alfredo A. Elosu Larumbe y Dra. María Soledad Gennari.

Cumplido el procedimiento previsto en el artículo 249 del CPPN, la Sala se plantea las siguientes **CUESTIONES:** 1.^a) ¿La impugnación extraordinaria interpuesta es formalmente admisible?; 2.^a) En el supuesto afirmativo, ¿resulta procedente?; 3.^a) En su caso, ¿qué solución corresponde adoptar? y 4.^a) Costas.

VOTACIÓN: A la **primera cuestión**, el Dr. Alfredo A. Elosu Larumbe dijo:

El Ministerio Fiscal presentó el escrito impugnativo en término; conforme a los artículos 242 primer párrafo y 249 del CPPN (cfr. en Dextra, correo electrónico del 27/3/2025 -en anexo-).

Además, en este caso, cabe tener en cuenta que el hecho atribuido al acusado configuraría un delito contra la integridad sexual de una mujer, menor de edad a la fecha de la presunta comisión del ilícito. Y que el Tribunal de Impugnación resolvió la procedencia de la suspensión del juicio a prueba a favor del imputado, en contra de la oposición fiscal.

En tales condiciones, considero que ésta es la única oportunidad posible para que la parte acusadora pueda cuestionar esa decisión que, según el impugnante, resultaría arbitraria y contraria al debido proceso y a los intereses de la presunta víctima. De tal modo, esta vía constituye un medio apto de control tendiente a evitar un gravamen de difícil o imposible reparación ulterior; ya que el cumplimiento de las condiciones establecidas para una SJP tiene prevista la extinción de la acción penal. También, para resguardar los derechos y garantías de jerarquía constitucional; entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a ser oída y el interés superior de la entonces adolescente (artículos 31 y 75 inciso 22 de la CN, 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 2 de la CEDAW y concordantes).

Asimismo, estimo que el acusador público ha efectuado un desarrollo argumental suficiente sobre la pretendida arbitrariedad de la resolución del Tribunal de Impugnación, y que el mismo no puede ser descartado *a priori* en esta fase de análisis.

En ese contexto, con total abstracción de la cuestión de fondo, los agravios resultan formalmente captables en los términos del artículo 248 inciso 2 del CPPN.

En virtud de lo expuesto, propongo declarar la admisibilidad de la impugnación extraordinaria presentada por el MPF (artículos 242 primer párrafo, 248 inciso 2 y 249 del CPPN). Mi voto.

La Dra. María Soledad Gennari dijo: adhiero a las consideraciones expuestas y a la propuesta efectuada por el señor Vocal que abrió este Acuerdo. Tal es mi voto.

A la **segunda cuestión**, el Dr. Alfredo A. Elosu Larumbe dijo:

Luego de analizado el recurso admitido, el pronunciamiento cuestionado así como las demás constancias del legajo, propongo que la impugnación extraordinaria interpuesta sea declarada procedente.

1) En primer lugar, cabe aclarar que la defensa solo había interpuesto impugnación ordinaria contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba. Por lo cual, la acusación admitida y la elevación del caso a juicio dispuesto por la jueza de Garantías se encuentra firme.

Además, en este caso, no se encuentra controvertido que el MPF se opuso a la concesión de la SJP peticionada por la defensa. Por lo cual, la cuestión gira sobre si esa oposición fiscal es motivada y razonable.

2) En el presente legajo, el acusador público atribuyó al acusado, entre otras circunstancias, que el 26/11/2021 en horas de la madrugada, al llegar -junto a otros amigos- a su domicilio, baja con fuerza a A. -de 15 años- del auto, la arrastra de los pies; ante esa situación, Y. M. interviene para evitar esa conducta. Luego, cuando A. se encontraba dentro del domicilio, se sienta en la cama de la habitación, con su celular en la mano; el imputado se acerca y violentamente le saca el celular, se sienta a su lado y sorpresivamente empieza a darle besos en la boca y en el cuello, dejándole un moretón violeta. Ante ello, A. intenta sacárselo de encima, pero no tenía fuerza porque él era más grande que ella. El acusado la tira sobre la cama con intención de accederla vía vaginal y para lograr ese cometido intenta desabrocharle el pantalón; A. se resistía y no lo dejaba, a pesar de ello, violentamente le rompe el pantalón, el botón y el cierre. A. intentaba sacárselo de encima, pero no podía; el imputado empieza a desvestirla, le baja el pantalón, le metía las manos adentro de la remera tocándole los pechos con sus manos; no logró su cometido ante la intervención de F. S. y de Y. M., quienes empezaron a golpear la puerta de ingreso de la casa que estaba con llave, logrando que A. saliera (cfr. en

Cícero, video de la audiencia de control de la acusación del 26/2/2025; 11:27:58/11:30:02).

3) En la audiencia de control de la acusación, la defensa -como planteo preliminar- peticionó la SJP; el MPF manifestó su oposición y el defensor reiteró su petición en el uso de la última palabra (cfr. video del 26/2/2025; 11:10:59/11:15:49, 11:15:51/11:19:55, 11:20:00/11:22:02, respectivamente).

En lo aquí pertinente, el MPF refirió, primero, a lo acontecido en este legajo desde la formulación de cargos (por ejemplo, propuesta de la defensa, que finalmente el acusado no aceptó). Luego, explicó que la única conformidad que la joven A. expresa es la de un juicio abreviado, en el que ella quería estar presente, hablar ante la jueza y escuchar que el imputado se declarara culpable. Señaló que no hay otra opción de parte de la presunta víctima, porque lo que quiere es un juicio; no quiere una SJP. Manifestó que ese fiscal aclara a cada mujer víctima de abuso sexual sobre la SJP, marca los principios constitucionales y que es un caso de violencia de género; que está sujeto, acompañando, a lo que ella como víctima entienda que la puede sanar. Que en ese momento, lo único que puede sanar a la joven A. es ser escuchada en un juicio y que pidió que se trabajara con la prueba que se tiene para lograr una declaración de responsabilidad. El MPF expresó que no hay otra opción que el juicio; que tiene la negativa de la víctima y que por la Convención de Belém do Pará la víctima tiene derecho a un juicio justo y ser escuchada, por lo que estimó que la negativa está fundamentada. Entendió que no

queda otra circunstancia más que realizar el juicio y que esa fiscalía, con la prueba que se permita llevar al debate, procurará una condena.

4) La jueza de Garantías resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa. Para lo cual, consideró que la oposición fiscal está fundada (cfr. video del 26/2/2025; 11:22:06/11:27:23).

Sostuvo que el artículo 61 inciso 7 del CPN establece que antes de cualquier decisión que extinga o suspenda la acción penal debe escucharse a la víctima. Aclaró que A. no estaba presente -en esa audiencia- porque no tenía una obligación de asistir; sino un derecho a hacerlo. Y que tiene que valorar esa ausencia en el contexto de la discusión que se está dando; que antes ya tuvieron una audiencia programada como control de la acusación (el 24/2/2025). Que en ese momento, la defensa anunció la posibilidad de un acuerdo y el MPF habló con la -presunta- víctima, y la razón por la que A. aceptaba el acuerdo era la declaración de responsabilidad.

Expresó que la valoración tiene que hacerla desde las obligaciones internacionales asumidas. Que existen obligaciones con el imputado; respecto a las cuales, entendió que no hay ningún inconveniente con avanzar con el control de la acusación y que ejerza sus derechos en un juicio. Pero que también existen obligaciones con la víctima; que la Convención de Belém do Pará no solo obliga a escuchar la palabra de la víctima, sino también establece una obligación de

perseguir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres. En este caso, hacia una mujer concreta que ha expresado una voluntad que es la de ser escuchada en una audiencia y escuchar al imputado asumir su responsabilidad.

Aclaró que el acusado no va a asumir la responsabilidad y ese es su derecho. Pero que la SJP, al finalizar el camino, implica un sobreseimiento y a eso se está oponiendo la fiscalía por la posición de la víctima.

Sobre lo alegado por la defensa, en el sentido que no era suficiente la oposición de la víctima para negar la SJP; la magistrada expuso que, en términos generales, estaría de acuerdo. La jueza explicó que si se estaría hablando de un delito contra la propiedad, lo analizaría de otra manera porque la oposición de una víctima, en esos supuestos, es distinta por el bien jurídico que está en juego. Que desde su perspectiva, la posición de una -presunta- víctima en un delito contra la integridad sexual, donde el daño ha sido causado en su propio cuerpo, en su propia psiquis, debe ser valorada de otra manera.

Consideró que si la presunta víctima le dijo al MPF que estaba de acuerdo con -la propuesta- que implicaba que iba a escuchar al acusado asumir su responsabilidad; entonces, claramente, A. no está de acuerdo con la SJP, porque en la misma no se asume la responsabilidad; sino que si -el acusado- cumple una serie de condiciones, accede al sobreseimiento. Y que desde el mismo artículo 17 del CPPN, en este caso,

entendió que no es procedente por todo lo que expuso con anterioridad.

Agregó que se había generado a la presunta víctima una expectativa distinta, el día lunes [24/2/2025]; cuando se suspendió la audiencia para ver si se alcanzaba un acuerdo. Que era otra posibilidad distinta al debate, pero de mayor intensidad que la SJP (cfr. video del 26/2/2025; 11:22:06/11:27:23).

5) En la audiencia de impugnación ordinaria, el Tribunal de Impugnación escuchó a la defensa -que recurrió la decisión antes referida- y al MPF; cada parte alegó a favor de su respectiva postura. Luego, se consultó a la joven A. si haría uso de la palabra y contestó que no. Después, la asistencia técnica del acusado hizo uso de la última palabra. Y con posterioridad, ese tribunal requirió precisiones a las partes; como así también, se cedió la palabra al acusado, quien dijo que es inocente (cfr. en Cícero, video del 19/3/2025; 00:02:15/00:16:55 -defensa-, 00:17:01/00:32:57 -fiscalía-, 00:33:02/00:33:07 -presunta víctima-, 00:33:10/00:38:08 -defensa-, 00:38:08/00:41:34 -preguntas y aclaraciones- y 00:41:36/00:41:46 -imputado-).

En esa oportunidad, la defensa alegó que la resolución de la jueza de Garantías no se encuentra debidamente motivada. Manifestó que la oposición del MPF no superaba el baremo de razonabilidad que establece el artículo 108 del CPPN (que fue únicamente en función de que la víctima no quiere); y que dicha oposición es lo que la magistrada toma para negar la SJP al acusado. Dijo que la única posibilidad para negar este instituto tiene

que ver con la posición fundada y razonable del MPF, que entendió que, en este caso, no hubo (cfr. 00:02:15/00:16:55). Solicitó que se revoque la resolución de la jueza de Garantías y se asuma competencia positiva, que se haga lugar a la concesión de la SJP al acusado y que se reenvíe el caso, para que otro magistrado, imponga las reglas de conducta (cfr. 00:33:10/00:38:08).

Por su parte, en la misma audiencia, el Ministerio Fiscal alegó en torno al rol y los derechos de la víctima, conforme a la normativa aplicable local, nacional y de jerarquía constitucional. Refirió a los antecedentes del caso y, en particular, que explicó a la joven A. -sobre la cuestión- y expresó que quería ser escuchada. Contraargumentó a favor de la postura de ese ministerio y señaló que la decisión de la jueza de Garantías estuvo motivada, que tuvo en cuenta que se trata de un caso de violencia de género -lo que no había sido discutido por la defensa-; que en forma razonada explicó los principios convencionales y el valor que le da a la presunta víctima. No es una cuestión de prevalencia de uno sobre el otro (víctima o acusado); sino que a partir de 1994 hay garantías constitucionales de la víctima, y una es escucharla. Solicitó que se confirme la resolución de la jueza de Garantías (cfr. 00:17:01/00:32:57).

6) En cuanto al alcance del control de las decisiones jurisdiccionales, se ha sostenido que la tarea revisora comprende el juicio sobre la motivación y razonabilidad. Para ello, se debe verificar que la decisión cuestionada haya cumplido con el deber de

explicar la razón o motivo que se tuvo en cuenta al momento de resolver; y si ese razonamiento se basa en parámetros lógicos y razonables.

7) En ese orden de ideas, al Tribunal de Impugnación le compete el control de la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, sin apartarse de las constancias del caso ni de la normativa aplicable; ya que, de otro modo, incurrirá en un supuesto de arbitrariedad.

Siguiendo tales lineamientos, en el presente legajo, tras el análisis de la resolución cuestionada se advierte un déficit que le resta validez como acto jurisdiccional.

8) En el pronunciamiento aquí impugnado, por unanimidad, se declaró la admisibilidad del recurso de la defensa y se revocó lo resuelto por la jueza de Garantías el 26/2/2025, como así también, se dispuso el reenvío para que -ante otro juez- se debatan las condiciones por las cuales la defensa solicita la SJP (cfr. video del 19/3/2025; 00:42:20/00:58:36). A continuación, se reseña lo expuesto -en esa decisión- sobre la cuestión de fondo.

El primer voto:

Mencionó lo establecido en el artículo 76 del CP y que el artículo 108 del CPPN prevé las cuestiones atinentes a la SJP.

Expuso que, en este caso, la jueza de Garantías se fundó específicamente en que la oposición realizada por la fiscalía se encontraba motivada y fundada; y por esa razón se rechazaba la SJP.

Expresó que ese órgano revisor analizó esa única causal de rechazo y adelantó que la opinión del fiscal no se encuentra motivada y fundada; específicamente solamente basada en la opinión de la víctima. Aclaró que se respeta la opinión de la víctima, que entiende necesario llegar a un juicio para superar su dolor o dar su palabra en el juicio.

Explicó que se considera el proceso entendido como "juicio y proceso amplio". Que en el sentido amplio de la palabra juicio comprende la posibilidad de la víctima que sea escuchada en todas las instancias del proceso. Y que así ocurrió en este caso, la -presunta- víctima fue escuchada en la audiencia ante la jueza de Garantías que trató la SJP; y en la audiencia ante ese órgano, que no quiso emitir palabra pero tuvo la oportunidad de ser escuchada.

Luego, dijo que entendían que procedía la SJP en este caso; en el que:

a) el delito prevé una pena máxima de 3 años y un mínimo de 6 meses; que la calificación legal puede ser discutida en el juicio. Que puede resultar una condena o una absolución; y que la primera siempre va a ser de ejecución condicional (el acusado no tiene antecedentes penales).

b) Que se valoraron que las condiciones ofrecidas por la defensa para la SJP son más gravosas que las que podrían imponerse en el supuesto de condena condicional. Que si el acusado no las cumple, va a atravesar un juicio; y si ese incumplimiento tiene que ver con la comisión de un nuevo delito, esa pena sería de

cumplimiento efectivo. A modo de ejemplo: que la defensa ofreció el tiempo máximo de control de la SJP (3 años), en el que el acusado se compromete a las reglas mencionadas por la defensa; también, que la voluntad del acusado de someterse a un tratamiento psicológico tiene una pauta -para ese tribunal- de garantizar de alguna manera que trabaje el enfoque en cuestiones de género y violencia contra la mujer. Sobre el ofrecimiento económico efectuado por la defensa y al que el MPF se opuso, expresó que no desconocen que dicho ofrecimiento no va a garantizar una indemnización para el daño sufrido, que nunca ningún tipo de indemnización podría cubrir el dolor sufrido.

Manifestó que tuvieron en cuenta que la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, y que obliga a que se escuche a la víctima. Reiteró que la -presunta- víctima fue escuchada en todas las instancias del proceso y que su opinión es importante, pero no vincula en este caso al fiscal ni a los jueces en relación con la decisión que están adoptando en este caso.

Que por esas razones y entendiendo que el fiscal "en su postura de buena voluntad obviamente se allanó a la opinión de la víctima para oponerse a la concesión" de la SJP, consideró que, en los términos del artículo 108 del CPPN, esa opinión no resulta razonada y motivada. Y por ende, concluyó que debía revocarse la decisión de la jueza de Garantías (cfr. 00:43:20/00:51:56).

El segundo voto:

Adhirió al anterior y explicó a la -presunta- víctima que el acusado quedaba sujeto al proceso durante 3 años y que ante el mínimo incumplimiento de una regla de conducta, la SJP se revoca y el imputado va a juicio por el hecho atribuido en este caso (cfr. 00:52:03/00:52:47).

El tercer voto:

Adhirió a los que lo precedieron y agregó que la postura contraria, es decir, no conceder la SJP en este tipo de hechos, en general, respaldada por el caso "Góngora" de la CSJN, ha tenido también fallos adversos a esa doctrina.

Refirió que si se sigue el caso citado, se está diciendo que, por el artículo 7 primer párrafo de la Convención de Belém do Pará sobre que hay que prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la única respuesta que se puede dar a esa mujer es que se sancione al imputado y la única manera de hacerlo es realizando un juicio. Consideró que se trata de una mirada corta de lo que es el proceso, que sería únicamente el juicio. Que la CSJN utiliza como una falacia argumentativa porque plantea como una incompatibilidad entre lo establecido por la Convención (en lo citado) y el tema de dar una SJP, porque no habría sanción.

Mencionó que hay un caso "Castillo" del 2019 de Cutral Có, que observaron en impugnación, que esa respuesta que se le da a la víctima está un poco teñida de algo de venganza; pero que no se respeta la

centralidad del objetivo y fines que tiene la Convención de Belém do Pará. Que el fin de dicha convención es que la víctima se vea reparada en los daños que el hecho ha producido (por ejemplo, las lesiones). Que si bien, en este caso, se trata de una tentativa, sí puede darse un daño psicológico; reiteró -lo expuesto en los votos anteriores- que tiene mejor respuesta con la SJP, porque el acusado va a tener que cumplir las medidas durante 3 años y ante el mínimo delito que cometa en ese plazo, se va a revocar la SJP y si es condenado en el juicio será de cumplimiento efectivo. Consideró que la víctima tiene su respuesta con la concesión de la SJP.

Que mirándolo de otra manera, si se realiza el juicio, el acusado puede ser absuelto y si es condenado, va a ser de ejecución condicional y las pautas del artículo 27 bis -del CP- van a ser mucho más livianas para el imputado que las propuestas por la defensa y que el MPF o la -presunta- víctima pueden sugerir otras pautas cuando se discuta el caso en la audiencia a realizarse a raíz de la resolución de ese órgano revisor (cfr. 00:52:52/00:57:35).

Por último, la magistrada -que emitió el primer voto- agregó que lo decidido por ese tribunal tiene que ver con la aplicación del artículo 17 del CPPN; en relación con la manda de una solución de los conflictos y evitar la aplicación de la pena como *ultima ratio* (cfr. 00:57:37/00:57:52).

Hasta aquí las consideraciones expuestas por el órgano revisor.

9) A partir de la reseña efectuada, verifico que existe el vicio alegado en el pronunciamiento impugnado. Es decir, se prescindió de un requisito legal exigido para la procedencia de la SJP, previsto en el cuarto párrafo del artículo 108 del CPPN. En este caso, tal requisito se encuentra vinculado con normas de jerarquía constitucional.

10) Si bien el Tribunal de Impugnación partió de la mención de los artículos 76 del CP y 108 del CPPN, luego, no efectuó el control de la decisión de la jueza de Garantías desde esa óptica.

Al respecto, el artículo 76 del CP establece que "la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes [...]". Y el artículo 108 del CPPN, en lo pertinente, dispone:

"[...] La procedencia requiere la conformidad del imputado y de la Fiscalía. El juez podrá rechazar la suspensión sólo cuando exista oposición motivada y razonable del fiscal [...]".

11) En este caso, como se adelantara, no está controvertido que hubo oposición fiscal para la concesión de la SJP al acusado.

Ahora bien, la jueza de Garantías consideró que dicha oposición se encontraba fundada. Mientras que el Tribunal de Impugnación sostuvo que analizó la causal de rechazo y que la opinión fiscal no se encuentra motivada y fundada.

En ese escenario, se advierte que el órgano revisor solo dedica dos referencias a la resolución de la

jueza de Garantías: a) al inicio del voto ponente, cuando expuso que la magistrada se fundó específicamente en que la oposición realizada por la fiscalía se encontraba motivada y fundada, y por esa razón rechazaba la SJP; y b) al finalizar ese mismo voto, cuando concluyó que debía revocarse la decisión de la jueza de Garantías (cfr. punto 8 del presente).

Desde ya se observa una conclusión del órgano revisor que carece de premisas suficientes; es decir, omitió analizar las consideraciones efectuadas por la jueza de Garantías para verificar su razonabilidad o no, conforme a la normativa aplicable y a las circunstancias concretas del presente caso. En su lugar, el Tribunal de Impugnación efectuó su propio examen de la oposición fiscal.

Si bien podría decirse que ese órgano de control ejerció la competencia positiva petitionada por la defensa y que, a raíz de ello, tras un examen de la cuestión, concluyó que no había obstáculo para la concesión de la SJP al acusado. Lo cierto es que, aun en ese supuesto, el Tribunal de Impugnación se apartó de la normativa aplicable.

Al respecto, caben las siguientes apreciaciones:

Primero, todos y cada uno de los requisitos legales deben estar cumplidos para evaluar la procedencia del instituto. Es decir, que pueda corresponder una condena de ejecución condicional, que no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público en ejercicio o por razón de su cargo, que no se trate de un

delito reprimido únicamente con inhabilitación y el último -aquí relevante-, que exista conformidad del imputado y la fiscalía; en éste se aclara que el juez podrá rechazar la suspensión sólo cuando exista oposición motivada y razonable del fiscal (artículo 108 del CPPN).

En la decisión aquí cuestionada se adelanta la conclusión de que la opinión fiscal no se encuentra motivada y fundada; específicamente basada en la opinión de la víctima. Pero no se aportan razones por las cuales no resultaría válido o razonable que el MPF tenga en cuenta los dichos de la presunta víctima.

Luego, el órgano revisor incluye argumentos asociados a la expectativa de ejecución condicional y a las condiciones o reglas de conductas. Sin embargo, esas consideraciones no suplen la falta del requisito analizado en este caso.

Como se expuso con anterioridad, para la procedencia de la SJP tienen que concurrir todos los requisitos antes enunciados. Y cuando se cumplen los mismos, recién resulta pertinente la evaluación de las condiciones ofrecidas por la defensa como reglas de conducta.

Segundo, en el pronunciamiento impugnado se expuso que se tuvo en cuenta la Convención de Belém do Pará que obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer; y a que la víctima sea escuchada. Sostuvo que se respeta la opinión de la presunta víctima y que A. fue escuchada en este proceso, entendido en sentido amplio, como todas las instancias del mismo; pero que dicha opinión no es

vinculante para el fiscal ni para los jueces. Además, en el tercer voto, se aludió al caso "Góngora" de la CSJN; se criticó que la única respuesta que pueda darse a la mujer sea que sancione al imputado y la única manera de hacerlo es realizando un juicio; que se trata de una mirada corta del proceso, que sería únicamente el juicio. Que en ese fallo se utilizaría como una falacia argumentativa porque plantea como una incompatibilidad entre lo establecido por la Convención mencionada (artículo 7, primer párrafo) y el dar una SJP, porque no habría sanción. Se consideró que, en este legajo, la víctima tiene su respuesta con la concesión de la SJP.

Sobre el caso "Góngora" de la CSJN (Fallos 336:392), si bien los hechos allí investigados no surgen de ese fallo, el accionar atribuido constituía dos hechos de abuso sexual simple, uno consumado y otro tentado, presuntamente cometidos contra dos mujeres (cfr. Pitlevnik, Leonardo G., director; *Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, Hammurabi, 1.^a ed., 2013, Bs. As., T. 15, p. 183). Es decir que, como en este legajo, se trataba de un recurso del Ministerio Fiscal contra la concesión de la SJP, aun cuando había oposición fiscal, en un caso en el que se imputaba delitos contra la integridad sexual en perjuicio de mujeres.

Aquí, resulta conveniente recordar que el artículo 7, incisos b y f, de la Convención de Belém do Pará establece:

"Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar,

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

[...] b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

[...] f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos [...]".

El Máximo Tribunal Nacional interpretó, en el precedente antes citado, que teniendo en cuenta los objetivos señalados (entre ellos, sancionar la violencia contra la mujer), el sentido del término "juicio" (del inciso f) resulta congruente con el debate oral. Esto, al entender que "[...] únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención [...]" (cfr. considerando 7). En ese escenario, el mismo precedente se ocupa de evitar los equívocos, ya que determina en forma clara el sentido en que emplea el término juicio.

En el presente caso, el Tribunal de Impugnación expuso que consideraba el proceso entendido como "juicio y proceso en sentido amplio" y que la presunta víctima tuvo oportunidad de ser escuchada por la jueza de Garantías y por ese órgano.

A fin de no incurrir en la falacia del equívoco, del contexto en el que se utilizaron los vocablos, estimo que resulta más apropiado el uso del término "proceso" en sentido amplio; para que queden comprendidas todas las etapas (investigación, intermedia, juicio, ejecución y recursiva).

Aclarado ello, entre los derechos y garantías mínimas reconocidas a las mujeres por la ley de protección integral a las mujeres n.º 26485, se mencionan:

"[...] c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte [...]"

Además, la "[...] Corte [IDH] ha desarrollado el derecho a ser oído, previsto en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones. La Corte ha reconocido que el derecho a ser oído comprende dos ámbitos: por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos, hacer planteamientos, aportación de prueba y, en síntesis, hacer valer sus derechos). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través de un procedimiento que satisfaga el fin para el cual fue

concebido.” (cfr. Corte IDH; *Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. N.º 12 Debido Proceso*, San José de Costa Rica, 2022, p. 36).

En ese orden de ideas, en este caso, considero que la referencia del Tribunal de Impugnación a que la víctima tuvo oportunidad de ser escuchada en esa instancia; en realidad, resulta meramente formal. Esto, dado que los dichos de la joven A. -comunicados al fiscal- respecto a que quería que la jueza la escuchara y que hubiera una declaración de responsabilidad del acusado, desde un ámbito material, solo era probable con la realización de un juicio (debate).

Sumado a todo ello, reitero que el órgano revisor no justificó por qué la oposición del Ministerio Fiscal no era razonable. Siendo que, surge del presente legajo, que la oposición fiscal se encuentra motivada en los dichos de la presunta víctima, en miras a cumplir las obligaciones que surgen de la Convención de Belém do Pará y siguiendo una política criminal según la cual, en los casos de violencia de género, ese ministerio se opone a la SJP, salvo que cuente con el consentimiento de la presunta víctima -lo que no ocurrió en este caso-.

En tales condiciones, por todo lo expuesto, se verifica que el pronunciamiento aquí recurrido carece de una debida fundamentación siendo la misma meramente aparente; al apartarse de la normativa aplicable y de las circunstancias concretas y particulares del presente caso.

12) En ese contexto, concluyo que se verifica la arbitrariedad alegada por el acusador público; por lo que el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación no resulta un acto jurisdiccional válido.

Creo así haber aportado las razones por las cuales corresponde hacer lugar a la impugnación extraordinaria del Ministerio Fiscal (artículo 248 inciso 2 del CPPN). Mi voto.

La Dra. María Soledad Gennari dijo:

Adhiero a las consideraciones y a la conclusión arribada en el voto del señor Vocal que me precede. Estimo conveniente agregar que, en el presente legajo, la razonabilidad de la oposición del Ministerio Fiscal, como uno de los órganos del Estado, tiene que evaluarse desde un enfoque interseccional. Es decir, teniendo presente distintos factores que afectan a algunas mujeres en diferentes grados o formas; en este caso, la condición de género y la edad de la presunta víctima, al momento de la comisión del hecho atribuido al acusado.

El enfoque interseccional ha sido receptado en distintos instrumentos y documentos internacionales; entre otros, en la Recomendación General n.º 28 del 16/12/2010 y en la Recomendación General n.º 33 sobre "El acceso de las mujeres a la justicia" del 3/8/2015, ambas del Comité de la CEDAW (cfr. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGC%2F28&Lang=en; y https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGC%2F33&Lang=en).

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió sobre el deber de los Estados de investigar con debida diligencia la violencia sexual contra las niñas. Así expuso:

“[...] Para casos de violencia y violación sexual en contra de mujeres adultas, la Corte [IDH] ha establecido una serie de criterios que los Estados deben seguir para que las investigaciones y procesos penales incoados sean sustanciados con la debida diligencia. En [esa oportunidad], la Corte tiene la oportunidad de referirse a la obligación que tiene un Estado cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violación sexual cometida en contra de una niña. Por ende, la Corte adoptará un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la niña.

[...] Los Estados deben adoptar, en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana, medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña [...]. En consecuencia, [...] el Tribunal analizará las presuntas violaciones a derechos en perjuicio de una niña, no solo con base en los instrumentos internacionales de violencia contra la mujer, sino también los examinará ‘a la luz del corpus juris internacional de protección de los niños y niñas’, el cual debe servir para definir el contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado [...], y en el caso particular, de la obligación estatal reforzada de la debida diligencia [...]”.

Agrega -esa Corte- que se dará aplicación a principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, entre otros:

"[...] el principio de respeto a la opinión de la niña en todo procedimiento que la afecte, de modo que se garantice su participación, en lo que resulte pertinente para identificar las medidas especiales que son requeridas para dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de delitos de violencia sexual" (cfr. Corte IDH, *Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, N.º 4 Derechos Humanos y Mujeres*, p. 105; <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo4.pdf>).

En ese escenario, comparto con la jueza de Garantías, que la oposición del fiscal a la suspensión del juicio a prueba -peticionada por la defensa- está motivada y resulta razonable, a la luz de lo establecido en la normativa aplicable. Entre otras, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y concordantes.

A la **tercera cuestión**, el Dr. Alfredo A. Elosu Larumbe dijo:

Atento al modo en que resolviera la cuestión anterior, propongo al Acuerdo que se haga lugar a la impugnación extraordinaria interpuesta por el MPF contra lo resuelto por el Tribunal de Impugnación el 19/3/2025

y, en consecuencia, que se revoque el pronunciamiento mencionado y se confirme la denegatoria de la SJP dispuesta por la jueza de Garantías. Además, que oportunamente se remita el legajo a la oficina judicial para se efectúe el juicio ordenado por la jueza de Garantías en fecha 26/2/2025. Mi voto.

La Dra. María Soledad Gennari dijo: adhiero al voto formulado por el Sr. Vocal preopinante, en esta tercera cuestión. Mi voto.

A la **cuarta cuestión**, el Dr. Alfredo A. Elosu Larumbe dijo:

Atento a las particularidades del presente caso, considero que corresponde eximir de la imposición de costas en esta instancia (artículo 268, segundo párrafo, última parte, del CPPN). Mi voto.

La Dra. María Soledad Gennari dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante por compartir la respuesta que da a esta cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, **SE RESUELVE:**

I. DECLARAR LA ADMISIBILIDAD de la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal contra el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación, dictado el día 19/3/2025, en el Legajo MPFZA n.º 48147/2024 (artículos 242 primer párrafo y 249 del CPPN).

II. HACER LUGAR al recurso antes mencionado. En consecuencia, **REVOCAR** la resolución del Tribunal de Impugnación del 19/3/2025 (artículo 248 inciso 2 del CPPN) y **CONFIRMAR** la denegatoria de la

suspensión del juicio a prueba dispuesta por la jueza de Garantías el 26/2/2025.

III. EXIMIR de costas en esta instancia (artículo 268, segundo párrafo, última parte, del CPPN).

IV. Registrar, notificar y oportunamente, remitir las actuaciones a la Oficina Judicial, para que se efectúe el juicio ordenado por la jueza de Garantías en fecha 26/2/2025.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores magistrados, previa lectura y ratificación por ante el secretario, que certifica.